

# Un mundo en cambio, y nosotros a vueltas con el Estatuto

ANTÓN COSTAS

Vivimos una época de cambios rápidos, globales e irreversibles que van a modificar las condiciones de trabajo y de vida que hemos disfrutado a lo largo de las últimas décadas. Durante un siglo cada generación ha conseguido vivir mejor que la precedente. Pero ahora es probable que las generaciones jóvenes (las nacidas después de los años setenta) acaben viviendo bastante peor que sus progenitores. Pero no sólo ellas se verán afectadas.

Hace unas semanas señalé en estas mismas páginas (EL PAÍS, 10 de enero de 2006) que el elevado precio de la vivienda constituye de hecho un mecanismo que transfiere rentas desde los jóvenes hacia los mayores, transferencia que va a continuar prácticamente a lo largo de toda su vida, en la que permanecerán endeudados.

Los cambios que están teniendo lugar en la ciencia, la tecnología y la economía van a proyectar sobre nuestras vidas todo tipo de efectos. Los jóvenes de los países desarrollados se están viendo obligados a compartir empleo y salarios con los trabajadores de los países emergentes de Asia y Europa del Este. Desde hace cinco años, los salarios están creciendo cada año a ritmo menor que el anterior. Es un fenómeno que afecta a todos los países desarrollados, relacionado con los cambios que trae la globalización. Y no ha hecho más que empezar.

Aunque en nuestro caso la cosa es peor. Los salarios reales no sólo no crecen,

sino que han disminuido como consecuencia de la mayor inflación. El salario medio real de los trabajadores catalanes era al final de 2005 igual que hace cinco años. Para agravar la situación, el empleo del que proceden esos salarios es cada vez más precario. Y lo que es peor: los jóvenes de entre 16 y 25 prácticamente no se han beneficiado del empleo creado en 2005. Y, por si no fuese suficiente, las perspectivas no mejoran: el empleo de los más jóvenes permanecerá estancado.

Pero los cambios que estamos viviendo no influyen sólo en el futuro de los jóvenes. También la generación del *baby-boom*, la de los nacidos entre los años 1945 y 1960, se ve afectada. La causa en su caso es lo que está ocurriendo con la demografía. El aumento espectacular de la esperanza de vida va a ser un verdadero *tsunami* demográfico, con consecuencias profundas y duraderas de diverso tipo: ¿qué van a hacer con esos 20 o 25 años de jubilados?, ¿quién pagará sus pensiones?, ¿cómo van a utilizar su creciente influencia po-

lítica al ser cada vez más numerosos?

Por otro lado, la generación adulta, la de entre 35 y 65 años y que tiene los mejores empleos y salarios, está viviendo también bajo la ansiedad que significa la deslocalización de empresas o actividades económicas. Hasta ahora ese troceamiento de la cadena de valor de las empresas afectaba

poner de relieve los rápidos, intensos e irreversibles cambios que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Cambios que van a afectar profundamente a nuestras fuentes de trabajo y bienestar.

Y mientras tanto, nosotros a vueltas con el Estatuto.

Es posible que necesitémos un nuevo Estatuto. De hecho, los nuevos criterios de financiación

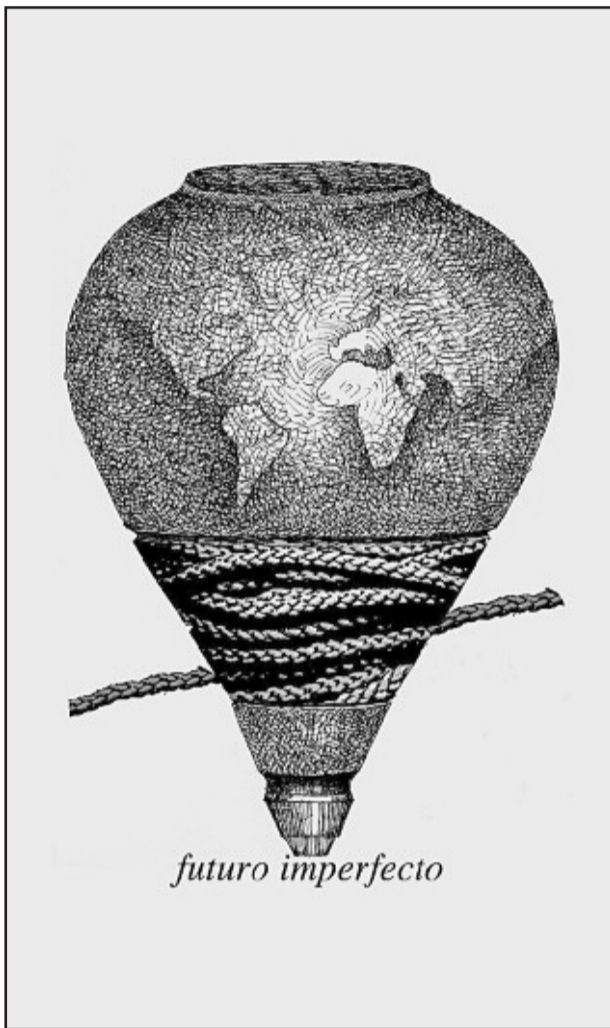
negociados con habilidad y buenos argumentos por el consejero Castells permitirán construir un modelo con más capacidad y autonomía financiera. Pero lo que sí es seguro es que necesitamos nuevas y mejores políticas públicas para hacer frente a esos cambios. Sin embargo, tal como se ha desarrollado hasta ahora, la batalla del Estatuto tiene poco que ver con ese objetivo. Buenas políticas se podían hacer también con el viejo Estatuto. Ejemplos tenemos en los últimos años, como el control del déficit, el plan de la energía, el impulso a las infraestructuras y el plan nacional por la educación.

En realidad la reforma estatutaria ha sido el campo de batalla escogido por Maragall, Carod Rovira y Saura, en el Pacto del Tinell, para la lucha por la hegemonía política en Cataluña, para ver quién concentra el poder político en las próximas dos generaciones. Y el motivo escogido fue disputarles la bandera del nacionalismo a los nacionalistas. Ante tal reto, Artur Mas no tenía más remedio que recoger el guante y elevar la apuesta, aunque fuese como simple recur-

so táctico. Y ahí les tenemos, como jóvenes gladiadores luchando por la supervivencia y el favor del emperador, quien, por cierto, también se juega mucho en el envite. Y como en la guerra todo vale, después de los golpes bajos, alianzas imprevistas y añagazas, ahora veremos tácticas dilatorias. El objetivo, como digo, es el poder. Unos para mantenerlo. Otros para recuperarlo. Tanto en Cataluña como en Madrid.

Pero mientras nuestros políticos siguen enfrascados en sus batallas de poder, ese mundo en rápido e irreversible cambio seguirá ahí, cada vez más amenazante para todos nosotros, pero especialmente para las generaciones más jóvenes y para aquellos que han de jubilarse en los próximos 10 o 20 años. El riesgo es que la prolongación de la batalla estatutaria consuma fuerzas y energía que son muy necesarias para afrontar esos cambios.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.



SILVIA ALCOBA

La reforma estatutaria ha sido el campo de batalla para disputar la lucha por la hegemonía política y ver quién concentra el poder político en las próximas dos generaciones

básicamente a actividades intensivas en trabajo de baja cualificación: los llamados "cuellos azules".

Pero las tecnologías de la información y telecomunicaciones por satélite permiten ahora a las empresas capturar ganancias de productividad de profesionales bien preparados de otros países. Por lo tanto, la deslocalización afectará cada vez a los servicios y a profesiones liberales, es decir, a los "cuellos blancos". (Veo que Iberia ofrece como un beneficio a sus mejores clientes el que, en caso de enfermedad grave, puedan tener una segunda opinión médica con los mejores profesionales del mundo a través de consulta *on line*). Médicos, abogados, psicólogos, arquitectos y otros profesionales verán cada vez más amenazada su posición por la competencia de profesionales de otros países. La reciente directiva europea de liberalización de los servicios (*directiva Bolkestein*) acentuará esa amenaza de deslocalización.

Podría seguir con los ejemplos. Pero creo que son suficientes para

# La crisis de los cayucos

JORDI SÁNCHEZ

Un viaje por mar durante cuatro días, y con destino a una de las más importantes plazas turísticas del Atlántico, es indudablemente un programa atractivo. Si el precio no supera los 300 euros, la oferta es irresistible. El problema reside en que ésta no es una oferta disponible en nuestras agencias de turismo para atraer a los miles de ciudadanos que buscan destino para las inminentes vacaciones de Semana Santa, sino que es la oferta que se puede encontrar en la costa norte de Mauritania para intentar alcanzar en cayuco —una especie de canoa— las costas de Tenerife o Lanzarote.

Es evidente que esta apuesta de miles de africanos para alcanzar un país europeo es mucho más arriesgada y peligrosa que hacerlo desde la costa de Marruecos cruzando el Estrecho. No es que el paso del Estrecho en patera sea una actividad sin riesgo, como centenares de muertes ya lo demuestran. El problema es que por un lado es mucho más caro encontrar plaza en una embarcación de Marruecos que en una de Mauritania. Por otro lado, hoy empieza a ser mucho más difícil para un subsahariano acceder a la costa norte marroquí como consecuencia de la mayor vigilancia policial contra la circulación en Marruecos de personas extranjeras con destino hacia Europa.

La crisis de los cayucos pone una vez más ante nuestros ojos la evidencia de que cuando la decisión de emigrar ya ha sido tomada, pocos inmigrantes van a desistir del viaje por las dificultades que puedan encontrar para alcanzar su objetivo de destino. Hay un instinto de superación que lleva a minimizar por parte del inmigrante la consideración de los riesgos que muchas de las formas de desplazamiento migratorio comportan. Lo hacen los menores magrebíes cuando se colocan en la parte inferior de los camiones o los que se encajan en cámaras frigoríficas para pasar inadvertidos en los controles policiales. Lo hacen los que se lanzan a la mar en pateras o cayucos. Lo hicieron incluso aquellos jóvenes que se escondieron en el hueco del tren de aterrizaje de un avión creyendo haber encontrado la fórmula para llegar desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Lo hacen los *espaldas mojadas* que se adentran en los áridos desiertos que creen que los llevarán hasta el sueño norteamericano.

La fuerza que necesariamente debe acompañar a cualquier persona que ya decidió dejar a los suyos y abandonar su país en busca de futuro en otro continente, lleva probablemente a convencerse de que cualquier riesgo será superado, por desproporcionado que este sea, especialmente si con anterioridad otros lo han superado. Poco importa que en muchas ocasiones —como ocurre en la crisis de los cayucos— más de la mitad de los que inician el viaje no lleguen a destino y pierdan su vida en el trayecto. No es desapego a su propia vida lo que los lleva a minimizar los riesgos, sino un exceso de confianza en ellos mismos, una confianza sin la cual ningún proyecto migratorio sería posible.

El Gobierno español exige al de Mauritania el cumplimiento del acuerdo del año 2003, según el cual ese país debe admitir a todos los inmigrantes que salieron desde Mauritania y que entraron en España de manera irregular. Poco o nada importa si esas personas son o no de nacionalidad mauritana. En verdad sabemos que la mayoría no son nacionales de ese país, sino de otros muchos países subsaharianos. Es evidente que un acuerdo está para que se cumpla, pero lo que debería plantearse en este caso es la validez moral del mismo y en consecuencia plantear su modificación. Se puede llegar a aceptar que Canarias no puede soportar más el incremento de centros para inmigrantes en situación irregular, pero lo que nadie puede mantener es que lo que no puede asumir el Estado español deba asumirlo Mauritania.

Que se canalice ayuda económica de Cruz Roja, Acnur o la Unión Europea para estos centros que se deben crear en Mauritania no puede ser la justificación para que desde España se transfiera el problema y la crisis a Mauritania. Que se anuncie que desde organismos internacionales se trabajará para que esos inmigrantes que se van a devolver a Mauritania sean repatriados posteriormente a sus respectivos países no puede ser tampoco lo que tranquilice nuestras conciencias pensando que finalmente Mauritania tendrá la ayuda adecuada para resolver esta cuestión.

La complejidad y dificultad que rodea la gestión de la inmigración no nos debería hacer pasar por alto que actuaciones como la que nos ocupan no son más que parches superficiales para una herida que no ha recibido previamente el mínimo e indispensable tratamiento para que la misma se cure.

Estamos ante una nueva forma de colonialismo en el sentido más genuino del concepto; trasladamos a esos territorios aquello que a nosotros nos produce incomodidad y costes. Parece razonable pensar que España ha comprado centros para inmigrantes en Mauritania a cambio de supuestas ayudas para el desarrollo de ese país. Finalmente, las autoridades mauritanas deben de pensar que su país es muy grande —tres veces mayor que la Península Ibérica— y sus habitantes muy pocos —menos de la mitad de los catalanes— para no ceder unos cuantos metros cuadrados a cambio de otras cosas. El problema, ciertamente, no son los metros cuadrados que estos centros ocuparán. El problema está en la necesidad de dar un trato digno a sociedad mauritana —¿por qué les imponemos a ellos lo que no queremos para nuestra sociedad?— y a unas personas —los inmigrantes—, que no pueden ser tratados como mercancías a la espera de su repatriación. ¿Qué estamos haciendo?

Jordi Sánchez es politólogo.